b) Los artículos 1280.1º y 1279 del Código Civil.

c) El derecho a la elección de Notario que corresponde al consumidor, sin que éste pueda imponer Notario que, por su competencia territorial, carezca de conexión razonable con alguno de los elementos personales o reales del negocio»

Ninguna alegación se ha formulado relativa a la imputación de una infracción administrativa leve por la carencia de la nota explicativa del precio de los inmuebles, exigida en el artículo 18.2.i) de la Ley de Cantabria 1/2006 y artículo 6 del Real Decreto 515/1989, anteriormente citado.

5.3.- Respecto al pacto relativo a la renuncia de los avales o seguros de las cantidades que se pretenden recibir a cuenta, debe señalarse que el artículo 7 de la Ley 57/1968 sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas dispone que «Los derechos que la presente Ley otorga a los cesionarios tendrán el carácter de irrenunciabiles».

No obstante, es criterio seguido en los procedimientos administrativos tramitados hasta la fecha el imputar por la inexistencia o insuficiencia de los avales una falta grave por cada promoción de viviendas, graduando la sanción en función de las cantidades sin avalar, insuficiencia de los avales, etc.

Cualquier actuación de la Administración que se separe de dicho criterio, debe ser suficiente motivada, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 54.c) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no concurriendo en el presente caso motivos que justifiquen el cambio de criterio seguido en las actuaciones precedentes, por lo que debe rebajarse la imputación de doce faltas graves realizada en la Providencia de Iniciación del Procedimiento a una única falta grave que se realiza en esta propuesta de resolución.

5.4.- Al graduar la sanción se ha tenido en cuenta la ausencia de antecedentes administrativos sancionadores, prevista como circunstancia atenuante en el artículo 52.2 de la Ley de Cantabria 1/2006 de Defensa de los Consumidores y Usuarios, concretando la cuantía dentro del grado mínimo previsto para la calificación de la infracción tipificada.

No obstante lo anterior, respecto a los avales, hasta el momento no ha quedado acreditado en el procedimiento que el beneficio obtenido por al imputada por no formalizar los avales de las cantidades entregadas a cuenta haya sido superior a 5.000 euros, por lo que no puede tenerse en cuenta la existencia de la agravante prevista en el artículo 52.1.d) de la Ley de Cantabria 1/2006 de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Por ello, la Instructora del procedimiento, vistos los textos legales citados y demás normas de general y procedente aplicación, formula la siguiente Propuesta:

Que se imponga a Inversiones AIC 2004, S.L., la inculpada en el procedimiento, la sanción global de veintiocho mil cincuenta euros (28.050 euros) de multa de acuerdo con el siguiente desglose:

- Diez mil cincuenta euros (10.050 euros) de multa por la comisión de una infracción administrativa grave en materia de normalización comercial (Libro del Edificio) prevista en el artículo 50.2.o) de la Ley de Cantabria 1/06;
- Tres mil euros (3.000 euros) de multa por la comisión de dos infracciones administrativas leves en materia de normalización comercial (2.000 por la fatal relativa al contrato tipo y 1.000 por la falta de nota explicativa de precios) previstas en el artículo 50.1.f) de la Ley de Cantabria 1/06; y
- Quince mil euros (15.000 euros) de multa por la comisión de una infracción administrativa grave en materia de normalización comercial (Libro del Edificio) prevista en el artículo 50.2.o) de la Ley de Cantabria 1/06.

Comuníquese esta propuesta al Órgano competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Cantabria 1/2006, para que sea dictada resolución de acuerdo con las previsiones del artículo 20.3 del Real

Decreto 1.398/93.

6. Contestación.

Se informa a la mercantil imputada que dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta propuesta de resolución, para formular por escrito las alegaciones que estime convenientes en defensa de su derecho, a cuyo efecto podrá previamente solicitar copia de los documentos obrantes en el procedimiento, que son:

- Denuncia número 43/06.
 - Orden de servicio al inspector de Consumo.
 - Citación para aportación de documentación de 23 de mayo de 2006.
 - Acta de la Inspección de Consumo número 1222, de 26 de junio de 2006, con su documentación adjunta.
 - Documentación complementaria solicitada en el acta.
 - Finalización de diligencias preliminares, de 5 de julio de 2006.
 - Providencia de Iniciación del procedimiento de 15 de noviembre de 2006.
 - Trámite de audiencia.
 - Providencia Interna relativa al trámite de audiencia.
 - Escrito de la imputada solicitando copia de diversa documentación obrante en el procedimiento y recibí de la misma.
- Alegaciones y documentación anexa presentadas por: Inversiones AIC 2004, S.L.

Santander, 2 de mayo de 2007. La instructora, Lucía Ceballos Martín.
07/6929

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

Dirección General de Salud Pública

Notificación de resolución de expediente sancionador número 90/06/SAN.

Habiéndose intentado notificar a la razón social «Aldacon y Barón, S. L.», como titular del establecimiento «Restaurante Tres Mares», con domicilio en Avenida Andalucía, bajo, a través del Servicio de Correos y no habiendo sido posible realizar tal notificación por causas no imputables a esta Administración, al ignorar el lugar de notificación, se procede de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la notificación del presente edicto: « Vistas las actuaciones llevadas a cabo por el personal del Servicio de Seguridad Alimentaria correspondientes al procedimiento sancionador de referencia, iniciado de oficio y los documentos incorporados al expediente número 90/06/SAN, y considerando los siguientes:

1. ANTECEDENTES DE HECHO Y HECHOS IMPUTADOS.

1.1.- Con fecha 2 de diciembre de 2004, se gira visita de inspección por los Inspectores de Salud Pública asignados al establecimiento «Restaurante Tres Mares», propiedad de la razón social «Aldaco y Barón, S.L.». Del resultado de la visita, se levanta el acta número 51467, en la que se constata que el establecimiento carece de autorización sanitaria de funcionamiento, así como de la existencia de una serie de deficiencias en relación con la normativa sanitaria en vigor.

1.2.- Se envía requerimiento del Jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria, de fecha 21 de diciembre de 2004, en la que se indica que debe corregir las deficiencias detectadas en la visita anterior, otorgándole el plazo de tres meses, desde la fecha de notificación del escrito, y se le concede el plazo de diez días para presentar solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento. La notificación se efectúa el 4 de enero de 2005.

1.3.- Con fecha 7 de junio de 2006, se gira visita de inspección al establecimiento requerido, comprobándose en el acta levantada por los Inspectores de Salud Pública número 539, que persisten las deficiencias en relación con la visita de fecha 4 de enero de 2005.

1.4.- Con fecha 5 de julio de 2005, se gira visita de inspección por los Inspectores de Salud Pública asignados, constatando en el acta levantada número 51307, que las deficiencias descritas no han sido corregidas.

1.5.- Se envía requerimiento del Jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria, con fecha 13 de febrero de 2006, para que presente en el plazo máximo de diez días solicitud de autorización sanitaria de funcionamiento, advirtiéndole que, en caso contrario se procederá a clausurar el servicio de elaboración y servicio de comidas preparadas.

1.6.- Transcurrido el plazo otorgado, con fecha 29 de junio de 2006, se gira visita de inspección, de la que se levanta el acta número 5897, en la que se constata que el establecimiento realiza la actividad de elaboración y servicio de comidas preparadas.

La Inspección ha podido comprobar las siguientes irregularidades:

1.- El establecimiento realiza la actividad de servicio de comidas preparadas, sin que conste en los archivos del Servicio de Seguridad Alimentaria, que dispongan de Libro de Visitas de Control e Inspección Sanitaria de comedores colectivos, ni estén en posesión de autorización sanitaria de funcionamiento.

1.7.- El Director General de Salud Pública dicta resolución de clausura de la actividad de elaboración y servicio de comidas preparadas en el establecimiento «Restaurante Tres Mares», con fecha 3 de julio de 2006.

1.8.- Con fecha 21 de noviembre de 2006, se dicta Providencia de Iniciación del presente expediente sancionador, por parte del ilustrísimo señor director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria, en la que inicialmente se imputa a la razón social «Aldacon y Barón, S. L.» titular del establecimiento «Restaurante Tres Mares», la comisión de una infracción administrativa de carácter leve. Dicha providencia fue notificada el 14 de diciembre de 2006.

1.9.- Transcurrido el plazo señalado para la presentación de alegaciones por parte del interesado, sin haber recibido escrito alguno, se procede a concederle trámite de audiencia en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación del escrito. Intentada la notificación por dos veces, dicho trámite de audiencia se publica en el Boletín Oficial de Cantabria el 27 de febrero de 2007.

2. NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS.

2.1.- Artículo 5 apartado 2 del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.

3. TIPIFICACIÓN.

3.1.- Los hechos citados pueden ser constitutivos de una infracción administrativa leve, prevista en el artículo 35 A) 1ª de la Ley 14/1986, de 15 de mayo, General de Sanidad.

3.2.- Las infracciones descritas podrán ser sancionadas con multa de hasta 3.00,5 euros cada una de ellas.

4. COMPETENCIA.

En virtud de la calificación asignada a la infracción administrativa cometida, sería el Director General de Salud Pública el órgano competente para dictar resolución que corresponda en el presente procedimiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

5. RESPONSABILIDADES.

Se considera responsable de las infracciones a la razón social «Aldacon y Barón, S. L.» imputado en el presente procedimiento, como titular del establecimiento «Restaurante Tres Mares».

6. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Las deficiencias constatadas en las Actas de Inspección, así como establecidas en los antecedentes de hecho de la presente Resolución, suponen un incumplimiento de lo señalado en los siguientes preceptos:

6.1.- En cuanto a que en el establecimiento se elaboran y sirven comidas preparadas sin que en los archivos del Servicio de Seguridad Alimentaria conste que dispongan de Libro de Visitas e Inspección sanitaria de comedores colectivos, ni poseen autorización sanitaria de funcionamiento para la actividad de elaboración y servicio de comidas preparadas, se encuentra expresamente recogido en el artículo 5 apartado 2 del Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas:

«Artículo 5. Registro General Sanitario de Alimentos.

1. Las empresas que elaboran, envasan, almacenan, distribuyen, importan, suministran y, en su caso, sirven comidas preparadas, en un local propio o ajeno, para colectividades, otros establecimientos o puntos de venta, quedan sujetos a inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos.

2. Las empresas que, en el mismo local, elaboran, envasan, almacenan, sirven y, en su caso, venden comidas preparadas directamente al consumidor final, con o sin reparto a domicilio, quedan excluidas de la obligatoriedad de inscripción en el Registro General Sanitario de Alimentos.

En todo caso, dichos establecimientos dispondrán de una autorización sanitaria de funcionamiento concedida por la autoridad competente, con carácter previo al comienzo de su actividad».

El incumplimiento de este precepto ha quedado comprobado, no sólo en el acta levantada por la

Inspección de Salud Pública, número 5897, de fecha 29 de junio de 2006, sino que en el Servicio de Seguridad Alimentaria no consta autorización sanitaria alguna o Libro de Visitas de Control e Inspección Sanitaria de comedores colectivos, que puedan evidenciar que se está llevando a cabo una actividad correctamente.

Por el contrario, se dicta resolución del Director General de Salud Pública, en las que se dicta la clausura de actividad de elaboración y servicio de comidas preparadas, ambas de fecha 3 de julio de 2006, y debidamente notificada al interesado, el 14 de julio de 2006.

Dado que el interesado no aporta prueba o documento alguno que pueda enervar la prueba de veracidad de las actas de la Inspección de Salud Pública, manifestada en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común: «los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios administrados», siendo por tanto responsable del incumplimiento de la normativa sanitaria en vigor.

Visto el expediente administrativo, los textos legales citados y demás normas de general y procedente aplicación

RESUELVO

-Imponer a la razón social «Aldacon y Barón, S. L.» como titular del establecimiento «Restaurante Tres Mares», una sanción de novecientos euros, en virtud de las circunstancias y naturaleza de las infracciones cometidas.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que se produzca esta notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 128 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de

la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con el artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 29 de marzo de 2007, El Director general de Salud Pública, Santiago Rodríguez Gil».

Santander, 9 de mayo de 2007.—El jefe de servicio de Seguridad Alimentaria, Miguel del Valle González.
07/7186

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO*Notificación de resolución de expedientes sancionadores sobre Protección de la Seguridad Ciudadana*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente, según los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/97, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o Entidades que a continuación se relacionan ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día de la publicación del presente Boletín Oficial, ante el excelentísimo señor Ministro del Interior. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a recurrir y, por tanto, firme esta resolución, recibirá una notificación de la Delegación de Economía y Hacienda informándole de dónde y en qué plazo debe efectuar el pago.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Santander, 23 de abril de 2007.—El delegado del Gobierno, P. D. el secretario general (BOC del 19 de diciembre de 2003), Jesús Congregado Loscertales.

		Nº Envío		10Q/07		
EXPEDIENTE	EUROS	APELLIDOS	NOMBRE	DNI	LOCALIDAD	FECHA MULTA
390000230506	300,52	Bajo Elorza	Jesús Francisco	15985891V	Santander	10/04/2007
390000020607	300,52	Fernández Mañero	Basilio	72091972J	Noja	16/03/2007
390000059307	300,52	Flores Pérez	Benigna	20189890F	Santander	10/04/2007
390000018507	300,52	Morante González	Iván	78935705G	Bilbao	16/03/2007
390000230206	480,81	Ortiz de Urbina Alberdi	José Miguel	30688564D	Bóveda	10/04/2007

07/6246

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO*Notificación de propuesta de resolución de expediente sancionador sobre Protección de la Seguridad Ciudadana*

Para dar cumplimiento a los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, se cita y emplaza a los interesados que se relacionan en hoja aparte, para que comparezcan en la Sección de Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana, de esta Delegación del Gobierno en Cantabria, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto, a fin de que le sea notificada la propuesta de resolución del expediente sancionador que asimismo se indica, por haber resultado infructuosa la referida notificación cursada directamente al interesado en el último domicilio conocido.

Artículo infringido: 25.1 de L.O.1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Santander, 23 de abril de 2007.—El delegado del Gobierno, P. D. el secretario general (BOC del 19 de diciembre de 2003), Jesús Congregado Loscertales.

		Nº Envío BOC:		10Q/07		
EXPEDIENTE	EUROS	APELLIDOS	NOMBRE	DNI	LOCALIDAD	FECHA PROP.
390000017707	300,52	Casal Pertejo	Daniel	12402685G	Valladolid	09/04/2007
390000052607	480,81	Llano Cirión	Marcos	72053344W	Arnuro	28/03/2007

07/6247